

Reflexiones a cuarenta años de la vuelta a la democracia

Presentación

El 24 de marzo de 1976, la Argentina ingresó a la cadena de dictaduras instaladas en la región. Antes habían sido Bolivia (1971), Chile y Uruguay (1973), Ecuador (1972), entre otros países. El plan sistemático de exterminio tenía dimensión regional, pero aún no lo sabíamos. Las universidades nacionales fueron instituciones que se convirtieron en la vidriera para que las fuerzas armadas identificaran al que no pensaba igual. Los planes de estudio tuvieron modificaciones, a la vez que docentes y estudiantes fueron perseguidos, empujados hacia el exilio y desaparecidos. De hecho, yo estudié Ciencias de la Educación en democracia y varias profesoras —quienes me enseñaron casi todo lo que sé—, habían regresado del exilio, entre ellas puedo nombrar a Silvia Llomovatte, Adriana Puiggrós, Cecilia y Berta Braslavski o Flora Hillert quien soportó la dictadura en una especie de exilio interno, solo para mencionar algunas titulares que marcaron un camino que hoy volvería a elegir.

El regreso a la democracia en 1983 marcó el inicio cronológico de un complejo camino de reconstrucción política, económica, social y educativa. “30.000 desaparecidos” y “Nunca Más” son dos términos que se perpetuaron en la memoria colectiva, que se hicieron carne más allá de las ideologías, y que después de cuarenta años, aún siguen siendo parte del ADN colectivo, a pesar de que últimamente tenemos que volver a explicar su contenido.

Esther Levy

Doctora en Educación (UBA). Docente e investigadora FFyL, UBA y Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta Olivia. Dicta las materias Pedagogía, Educación de Adultos, y Trabajo y Políticas Sociales. Secretaria de Cultura de FEDUBA (Sindicato de Docentes de la UBA) y Profesora del Seminario Políticas Públicas y DD.HH. de la Maestría en DD.HH. de la UNLP.
estherlevy01@gmail.com



Aula 108 de la FFyL donde está el mural con las fotos de los/as desaparecidos/as de la Facultad.

Foto: Javier Moscoso.

El mes de diciembre de 2001 marcó un punto de inflexión que puso en jaque las bases de la democracia. No solo por la partida/huida del presidente constitucional Fernando de la Rúa, quien no completó su mandato sin dar explicaciones, sino porque participamos de un estallido institucional que, sin embargo, no puso en riesgo la democracia, aunque sí la dañó muchísimo. Un país en llamas con la economía destrozada por el saqueo neoliberal y la corrupción política y empresarial no son compatibles con el ejercicio de los derechos sociales.

Hoy, a cuarenta años de 1983, ese piso mínimo y básico de acuerdo es cuestionado por el avance de una derecha que reestablece la idea del enemigo interno que lo relaciona con todo aquel que esté identificado con los Organismos de DD.HH., los sindicatos, las organizaciones sociales y políticas, o simplemente con un horizonte de justicia social. Frente a este escenario y desde nuestro lugar de trabajo, *los/as pedagogos/as no tenemos permiso para ser indiferentes*. Sabemos que el trabajo de investigar se da en un campo donde el credencialismo impone tiempos y formatos de producción de *papers* para revistas indexadas que la mayoría de las veces leemos entre nosotros. Esa preocupación a veces ubica en segundo plano el compromiso principal de las universidades nacionales: la producción de conocimientos al servicio de las necesidades del pueblo (que, además, nos subsidia). Es decir,

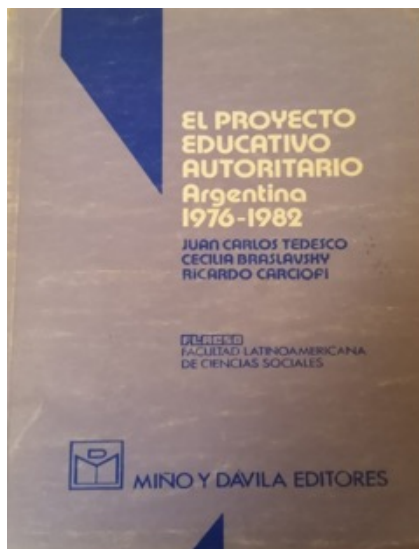
lo que investigamos no siempre impacta o tiene correlato en la realidad concreta. Eso no implica que todos los equipos se concentren en los mismos temas, sino que es necesaria una política científica que direcciona con objetivos claros hacia un proyecto de desarrollo nacional y, si no la hubiera, deberíamos forjarla. En mi caso, tuve la suerte de formarme con alguien a quien respeto mucho, Silvia Llomovatte, con quien aprendí casi todo sobre la profesión. Me convertí en docente universitaria e investigadora crítica lo que me brindó un marco conceptual para desnaturalizar y problematizar los procesos educativos en sociedades desiguales como la nuestra. Educación y Trabajo, mi campo de especialización, sin duda exige compromiso social, más aún en el contexto de la universidad pública.

La dimensión política del trabajo de educar en la universidad

El neoliberalismo como modelo político-económico se consolidó en la región en la última década del siglo XX. Se trata de un proyecto salvaje en todo sentido que, desde entonces, reaparece con distintas fachadas, pero el mismo objetivo: más mercado y menos Estado. Desde el comienzo el individualismo fue un componente central de la estrategia autoritaria que apuntó a quebrar los lazos colectivos de las bases en los barrios, en las fábricas, en los sindicatos e incluso en la universidad. “Por algo será”, “no te metas”, “algo habrán hecho” se convirtieron en latiguillos de uso corriente para justificar la inacción o el “salvarse solo” y esto, lamentablemente, en la actualidad aún está bastante naturalizado. La democracia habilita a pensar, estudiar y publicar con libertad los temas que nos interesan cuyo límite es la calidad científica que requiere la producción de conocimientos en el ámbito universitario. La responsabilidad sobre los resultados de las investigaciones se extiende hasta para qué, dónde, cómo llega el conocimiento producido y es ahí donde se pone en juego la estrategia de la pedagogía crítica: generar procesos reflexivos con horizontes emancipatorios.

En 1987, ya en democracia, se publicó *El proyecto educativo autoritario. Argentina 1976-1983* que indagó sobre temas como currículum escolar, Estado, burocracia y políticas educativas y educación y aparato productivo durante la dictadura. Fue y es un texto que además de contener datos históricos de la etapa, da cuenta del clima en que se desarrolló la producción intelectual a principios de los años 80, pero, además, fue un texto que recuperó

información que luego sirvió para idear alternativas democráticas para un sistema educativo diezmado y muy deteriorado.



La educación como derecho humano es más que una declamación

Desde la llegada de la democracia la educación como derecho humano nunca se puso en duda. Explícita o tácitamente, es un acuerdo que atraviesa las investigaciones pedagógicas y sobre el que no hace falta aclarar ni citar autores/as. Se convirtió en un piso de acuerdo del mismo modo que el "Nunca más". En los 90 fue bandera de resistencia a la Ley Federal de Educación y a la Ley de Educación Superior, en las reivindicaciones de la Carpa Blanca y en las marchas contra el intento despolitizador de los derechos sociales. El guardapolvo blanco se convirtió en ícono de lucha y resistencia a la par que se consolidaban los equipos de investigación que se ocupaban de la educación pública (formación docente, educación y trabajo, políticas educativas, historia de la educación, etc.). Un libro que Adriana Puiggrós publicó en 1997 sintetizaba la etapa y, recuperaba el lugar de la organización política como espacio de resistencia al neoliberalismo: "Durante los años de la penumbra menemista (noche para muchos), no se dejaron de producir propuestas programáticas alternativas y programas desde los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales" (1997: 168).

Luego, en 2003, con la asunción a la Presidencia de la Nación de Néstor Kirchner primero y después de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó una etapa de políticas de gobierno que se orientaron a la restitución y profundización de los derechos. Con mayor o menor nivel de acuerdo ideológico, las investigaciones giraron en torno a la calidad de las políticas y a los modos en que el Estado las definía, diseñaba e implementaba, pero el piso de acuerdo se mantuvo intacto: la Educación es un derecho humano y como tal no prescribe con la edad, enfatizábamos los que nos dedicábamos a la educación de jóvenes y adultos. Fue una etapa fructífera de análisis político de la coyuntura educativa argentina incentivada desde el Estado con políticas de becas, subsidios y creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCYT). La agenda se amplió con la sanción de nuevas leyes como las de Educación Nacional, Técnico-Profesional, Financiamiento Educativo, Educación Sexual Integral, entre otras, la creación de nuevas universidades nacionales y el avance de políticas intersectoriales que incluyeron componentes educativos en políticas sociales (Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y Argentina Trabaja, por mencionar dos ejemplos). Con Lidia Rodríguez planteábamos en 2015, en un artículo en esta misma revista, que la restitución de derechos había sido un proceso reparador, democratizador y transformador porque “en ese proceso se constituyen nuevos sujetos individuales y colectivos que fortalecen la trama social. Ello produce una suerte de círculo virtuoso, es decir, se construyen nuevos escenarios donde surgen demandas de mayor democratización en un proceso que no tiene fin” (2015; 10). En definitiva, en el período 2003-2015 la educación cobró relevancia en la agenda gubernamental y ello tuvo incidencia directa en la producción investigativa, tanto por el interés que despertaban los procesos como por el estímulo económico (política de becas, sobre todo) y apertura de nuevos institutos de investigación en las universidades del bicentenario.

El período 2015-2019 rápidamente revivió el discurso neoliberal de los años 90 pero esta vez sin disimular el desprecio por lo público y las conquistas sociales de todo tipo. El retroceso fue enorme en materia de derechos y hasta se pusieron en tela de juicio los avances en materia de derechos humanos (el mismo presidente de la nación dijo que estos eran “un curro”), la escuela pública sufrió un importante deterioro y descrédito a partir de discursos mercantilistas y privatistas, a punto tal que el Ministro de Educación la consideró “una máquina de hacer chorizos” y el Presidente hasta consideró una desgracia “caer en la escuela pública”. Fue una etapa de indignación y desconcierto que llevó a tener que responder casi a diario los ataques del

oficialismo hacia la universidad y los/as trabajadores/as de la educación a la par que comenzó a ponerse en discusión aquel piso mínimo de acuerdo democrático (mencionado en líneas anteriores) naturalizando la posibilidad de discutir incluso la veracidad de los hechos de la dictadura.

El gobierno actual, iniciado en 2019 encontró el país endeudado, deteriorado y golpeado por la pandemia de COVID-19. Los cuatro años macristas habían enfrentado a la sociedad bajo la metáfora de “la grieta” normalizando la idea de que aquel que piensa distinto es enemigo y debe ser eliminado (cualquier similitud con los discursos de la dictadura no es casualidad). La desvalorización de lo público había hecho un daño solo reparable con políticas claras, concretas y profundas. Sin embargo, los problemas internos de la coalición del gobierno, la presión de los grupos concentrados de poder, la escalada inflacionaria, y la falta de reflejos para reaccionar decididamente cuando el gobierno aún no había sufrido desgaste, llevaron a delinear el escenario actual del cuarenta aniversario de la democracia.

Democracia y avance autoritario en el siglo XXI

La Argentina nunca terminó de sanar las heridas del infierno de la dictadura. Todavía hay madres buscando a sus hijos, hijos que no saben el destino de sus padres y nietos buscados por abuelas para contarles cuál es su identidad. Genocidas que nunca fueron juzgados y cómplices civiles nunca buscados. Sin embargo, y a pesar de todos esos dolores, hemos logrado instancias reparadoras como los juicios por crímenes de lesa humanidad, la restitución de alrededor de 130 nietos/as (quedan aún algo así como 400 sin encontrar), la creación de sitios de la Memoria donde hubo espacios de exterminio. El pañuelo blanco continúa siendo un símbolo y a la vez un recordatorio de la lucha permanente por Memoria, Verdad y Justicia. Fue en 2017 cuando, al menos varios/as de nosotros/as, percibimos los primeros indicios de un retroceso que iría tallando paulatinamente en el sentido común. El intento del 2x1 que buscó la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad puso nuevamente en evidencia que los dinosaurios no habían desaparecido o bien, que sus crías se habían puesto en acción. Desde entonces, se sucedieron declaraciones de violencia explícita y candidatos/as políticos/as que niegan la crueldad de los hechos de la historia reciente.

Los discursos de odio, el intento de asesinato a la Vicepresidenta y la inacción de la justicia, las amenazas de hacer desaparecer el Estado y con él la educación pública, la criminalización del/la que piensa distinto, la naturalización de la mano dura como política de seguridad, la sospecha moral e intelectual sobre los/as docentes y sindicatos, la estigmatización de los/as pobres que “nunca llegarán a las universidades” y la criminalización de los reclamos sociales, son algunos de los retrocesos. Esto sucede sin demasiada reacción del Poder Ejecutivo que mantiene una mirada contemplativa sobre estos episodios. En este contexto, para la comunidad educativa hay pocas opciones: resistir, discutir e instalar la agenda de la educación pública o mirar para otro lado. Y es, donde entiendo, que habría que plantearse para qué, por qué, qué investigamos y qué aportes hacemos los/as pedagogos/as para torcer la agenda educativa que impone la derecha. Es un desafío urgente.

Recuperando a Apple: ¿por qué triunfa la derecha?

Las recetas de la década de 1990 no alcanzan para reinstalar el derecho a la educación. Resulta imperativo darle dimensión política a nuestra respuesta frente la embestida brutal de los sectores autoritarios. Generar conciencia y movilización sobre la educación como derecho social es un proceso que lleva tiempo, sobre todo cuando hay que desandamiar el argumento contrario naturalizado en el sentido común. Apple (1993), en un texto que trabajamos en la cátedra de Pedagogía, habla de la política del sentido común y plantea una cuestión fundamental para delinear una estrategia pedagógica en estos escenarios. Él sostiene que la derecha triunfa primero en el plano cultural antes que en los político y económico. ¿Por qué? Porque primero normaliza en el sentido común contenidos que hacen posible que se instale un modelo que perjudica a las mayorías con el apoyo de los perjudicados y dice que “somos testigos de cómo los elementos de las ideologías de los grupos dominantes se convierten en auténticamente populares” (1993: 29-30). Por ejemplo, la naturalización de las ideas de meritocracia, individualismo o competencia como valores incuestionables genera la sensación de que el éxito es individual y que depende del esfuerzo, ocultando que existen condicionantes que posicionan a las personas de manera diferencial. Aquí Apple agrega:

Existe una ruptura en las creencias de muchos segmentos de la sociedad que históricamente han tenido menos poder, ruptura que ha sido ampliada y reforzada por poderosas fuerzas económicas y políticas. Y estos cambios ideológicos en el sentido común ejercen una profunda influencia en lo que una gran parte del público piensa sobre el rol de la educación en la sociedad... (1993: 30)

Posiblemente esto dé pistas para pensar los porqués del anclaje tan fuerte de ideas antipopulares que se repiten sin mayor profundidad que un eslogan publicitario. No obstante, es urgente ir más allá del diagnóstico y planificar estrategias que rompan con la superficialidad de estos argumentos, que trasciendan las aulas e instalen el debate público. Para eso, es necesario, también, una estrategia comunicacional sólida que no banalice ni distorsione las cosas. En definitiva, a cuarenta años del regreso a la democracia, cuando parecía que algunos temas estaban saldados, aún nos queda el desafío de reconstruir acuerdos básicos de convivencia con celeridad y decisión política porque el futuro llegó hace rato pero no llegó como lo esperábamos, al menos para los/as que creemos que la democracia es mucho más que votar cada dos y cuatro años.

A modo de reflexiones provisionarias

Este artículo propuso un ejercicio de reflexión sobre para qué, por qué y qué investigamos los/as pedagogos/as, qué aportes hacemos a la realidad educativa y qué desafíos tenemos en un país que cumple cuarenta años de democracia ininterrumpida. Por ello, compartí estas líneas con la franca intención de aportar al debate en general, y pedagógico en particular. Me refiero al sentido político (ineludible) en la agenda cotidiana de la educación pública que tienen las investigaciones subsidiadas por el Estado.

Mientras escribía estas líneas ocurría un episodio gravísimo: la vandalización de la Baldosa por la Memoria de la escuela secundaria María Claudia Falcone (a la vez que llegaban noticias de actos similares en otra escuela secundaria técnica).



Baldosa por los estudiantes detenidos-desaparecidos vandalizada. Foto: Centro de Estudiantes de la Escuela María Claudia Falcone.

Así amaneció el 5 de junio de 2023 la vereda de la escuela secundaria María Claudia Falcone de CABA que lleva el nombre de una estudiante desaparecida la Noche de los Lápices. Nadie se atribuyó el hecho, aunque lleva la firma de un candidato a presidente de ultraderecha.

Mientras los padres, docentes y organizaciones sociales, políticas y de DD.HH. visibilizaban esta situación en los medios, los/as estudiantes de la escuela organizaron un acto de repudio en la puerta de la escuela limpiando y restaurando la vereda (pañuelos blancos tachados e inscripciones negacionistas). El documento que leyeron esa mañana del 7 de junio de 2023 turnándose entre 10 o 12 estudiantes comenzaba así "El amor vencerá al odio, en estos días no lo paramos de repetir. Porque nosotros militamos desde ahí, por y con le otre. La escuela pública nos enseña a ser personas críticas, con memoria del pasado para pensar el presente. El compromiso de construir por y con le otre lo lleva cada pibi de nuestra escuela y nuestra generación. Porque nos enseñaron que al odio se le gana con amor y militancia".



La misma baldosa restaurada por les estudia

Esto me hizo reflexionar sobre el futuro de la democracia y la educación pública en un escenario de intolerancia y violencia política. Seguramente tan mal no hemos hecho las cosas porque estos/as chicos/as nos lo hacen saber. Creo que hay que volver a las preguntas sobre el rol de los/as pedagogos/as, la pedagogía y la investigación para seguir acompañando y formando a las nuevas generaciones lejos de los discursos de odio.

Bibliografía

- Apple, M. (1993). *El conocimiento oficial. La educación democrática en una era conservadora*. Barcelona, Paidós.
- Levy, E. y Rodríguez, L. (2015). La educación, las políticas públicas y la constitución de sujetos en la última década. *Espacios de Crítica y Producción* N° 51: 3-12, noviembre. Buenos Aires, Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil, FFyL-UBA.
- Puiggrós, A. (1997). *La Otra Reforma. Desde la educación menemista hasta el fin de siglo*. Buenos Aires, Galerna.
- Tedesco, J. C.; Braslavsky, C. y Carciofi, R (1983). *El Proyecto Educativo Autoritario. Argentina 1976-1982*. Buenos Aires, Miño y Dávila.